RAWSON,

VISTOS:

Estos autos caratulados: **«Recurso de Queja en autos: " <PER> c/ <TEXTO_ANONIMIZAR> s/ Accidente de trabajo (sistémico)" (Expte. N° 289/24)»** (Expte. No 26339 - 2025).

DE LOS QUE RESULTA:

La demandada interpuso recurso de queja (CRU007215000000095004-1) contra la SI N° 3/25 de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto contra la SDL N° 140/24.

En el punto I de la presentación se refirió a la personería, individualizó el objeto y puntualizó el cumplimiento de requisitos de admisibilidad (constitución de domicilio y copias). En el ap. II, afirmó haber recurrido en tiempo oportuno e identificó actos procesales cumplidos en las instancias previas. A continuación, en el acápite III efectuó un breve relato de antecedentes del caso y en el punto IV se abocó a la refutación de los argumentos del fallo.

En primer lugar, sostuvo que la Cámara incurrió en un evidente y excesivo rigorismo al rechazar la casación por cuestiones estrictamente formales en relación con la carátula del recurso interpuesto, pese a que la presentación cumplía con los requisitos de la normativa procedimental y se fundó debidamente. Así, agregó, en base a dicho excesivo rigor formal omitió dar trato a los agravios centrados específicamente en la violación de derechos de raigambre constitucional, generada por el apartamiento a lo dictado por la normativa vigente y la excesiva y contraria a derecho

determinación del IBM respecto de un trabajador eventual, así como también respecto de la capitalización y los intereses. Aseveró que demostró la existencia de una cuestión federal y que la sentencia resulta arbitraria y afecta garantías constitucionales al desestimar el recurso interpuesto. Indicó que la Cámara se apartó del derecho aplicable al dictar una sentencia contraria a derecho.

Destacó que tal circunstancia fue puesta de manifiesto con total claridad, rigor jurídico y puntualizando cada uno de los erróneos y arbitrarios razonamientos que fueron el basamento de la condena.

Aseguró que en el escrito recursivo delimitó la inobservancia y errónea aplicación de la ley, así como la omisión de cuestiones sustanciales que hubieran dado lugar a una solución distinta del caso, todo lo cual resulta arbitrario, le ocasiona agravio y un perjuicio a su derecho de propiedad.

Precisó que la resolución de la Cámara incurrió en un grosero error en la interpretación de las normas y resulta contraria al fallo *«Espósito»*, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que la ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los importes a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/09.

Insistió en que el agravio recae sobre la determinación de intereses y capitalización que implican una doble actualización de intereses, puesto que al tener por acreditado un IBM contrario a la ley se dispone luego que el capital devengará intereses desde los 30 días corridos de la primera manifestación invalidante hasta la cancelación del

crédito. Todo lo cual importa una interpretación tergiversada de lo normado por el art. 12 LRT y deriva en una vulneración del derecho de propiedad. Agregó que se ordenaron aplicar intereses sobre el monto de condena -tasa RIPTE-, lo cual se apartó de lo dispuesto por el decreto 669/19 y sus resoluciones complementarias (Resol. 1039/19 y 332/23).

Afirmó que la exposición que efectuó en la casación arroja luz sobre la rebuscada e ingeniosa, pero injusta y arbitraria decisión del Tribunal, en forma contundente, razonada, pormenorizada y en todo de conformidad con la correcta interpretación de las normas, lo que pone en evidencia la arbitrariedad del fallo recurrido.

Dijo que además de vagos, los fundamentos de la Cámara para rechazar el recurso interpuesto son inexistentes.

Respecto de la arbitrariedad, aseveró haber plasmado que la sentencia -cuya revocación pretende- carece de fundamentos lógicos, razonables y necesarios. Citó jurisprudencia de la CSJN.

Finalmente, en el apartado V, formuló petitorio en el que solicitó se revoque el decisorio y se revierta la condena por haber sido declarada en oposición a la jurisprudencia de la CSJN, convalidando la aplicación en forma *«analógica»* de una norma no vigente y con prescindencia de las constancias de autos.

CONSIDERANDO:

I. A modo de introducción, es pertinente recordar que esta vía recursiva implica un pedido de revisión al juicio de admisibilidad preliminar que efectuó la Cámara. Para ello, es menester

examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el código de forma (art. 302 y concs. del CPCC) y sistematizados en el Ac. Plenario 3821/09 de este Cuerpo.

Esta presentación directa, como recurso extraordinario que es, debe autoabastecerse y demostrar el desvío jurisdiccional de la denegatoria. Asimismo, debe examinarse con estrictez, sin que puedan suplirse de oficio las omisiones en que incurra la parte, en razón de la competencia excepcional del Tribunal (STJCh, SI N° 75 y 104/SRE/13 y 10 y 103/SRE/17, entre otras).

II. Bajo tales premisas y luego de la lectura de la queja, se impone señalar que no cumple con la carga de refutar, en forma concreta y razonada, todos y cada uno de los fundamentos independientes de la sentencia que dispuso la inadmisibilidad de la casación (art. 268 y concs. del CPCC; regla 6, Anexo del Ac. Plenario 3821/09 STJCh).

II.1. La resolución puesta en crisis (SI N° 3/25) declaró la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto contra la sentencia definitiva laboral N° 140/24 por incumplimiento de los requisitos formales establecidos en los arts. 2 incs. *a* e *i* y 3 *c.I* del anexo del Ac. Plenario 3821/09 STJ y art. 292 inc. *a* del CPCC.

Para decidir de ese modo, los jueces de la alzada comenzaron refiriéndose a las causales casatorias invocadas, destacando que el planteo resultó confuso en tanto en la carátula solo se consignó la prevista por el art. 291 inc. *e* del CPCC, mientras que en el escrito recursivo se esgrimieron otras dos (incs. *b* y *d* del art. 291 del CPCC). Destacaron que, así expuesto, fue en extremo

impreciso sobre las cuestiones a resolver por la vía extraordinaria intentada.

Continuaron analizando la autosuficiencia del recurso, y concluyeron que la casacionista realizó una apretada síntesis de los antecedentes del proceso pues se limitó a relatar lo acontecido en primera instancia con la demanda y la contestación, transcribió una porción de la parte resolutiva de primera instancia y efectuó una brevísima referencia a la sentencia impugnada, lo que importó un relato insuficiente y sintético que no hizo referencia a ninguno de los fundamentos dados, lo que incumple con lo dispuesto en el art. 3 inc. *c* del Anexo del Ac. Plenario 3821/09 y el art. 292 inc. *a* del CPCC. Citaron jurisprudencia de este Tribunal respecto de la autonomía de los recursos de casación.

Seguidamente, concluyeron que se omitió cumplir con la correcta confección de la carátula. En primer lugar, indicaron que no se consignó el «objeto *de la presentación*» (art. 2 del Anexo, inc. *a)*. Luego, precisaron que únicamente se transcribieron los puntos cuestionados por la recurrente, omitiendo las demás exigencias requeridas por el inc. *i* del citado Ac. Plenario.

Con cita de jurisprudencia concluyeron que el examen efectuado no constituye un exceso de ritual en tanto los recursos procesales y sus recaudos conforman un orden que no puede ser soslayado.

II.2. Contra estos argumentos debió alzarse la presentante para probar el error de los magistrados al momento de rechazar la casación. Sin embargo, tras la lectura de los fundamentos de la queja resulta evidente que no existe crítica idónea para

revertir lo resuelto y habilitar el carril extraordinario.

En principio, no individualiza todos los fundamentos que la Cámara desarrolló al declarar inadmisible el recurso y tampoco los critica.

Así, para comenzar, la alzada le indicó que su planteo era confuso pues las causales invocadas en la carátula diferían de aquellas consignadas en su escrito casatorio. Sobre este aspecto nada dice la queja. Tampoco hace referencia alguna al argumento vinculado con la ausencia de autonomía de su presentación. De igual manera, no se hace cargo de las falencias que le señalaron en la confección de la carátula, puesto que como todo argumento indica que la misma fue completada conforme la normativa procedimental vigente, pero sin dar mayores precisiones en relación con el aspecto señalado como incumplido -objeto de su presentación-. A su vez, No indica cómo hizo mención a todos los recaudos que exige el inc. *i* de la misma norma: «la *mención clara y concisa de las cuestiones planteadas con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de este Superior Tribunal de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema, si los hubiere; y/o la indicación de la ley o doctrina legal que se considere violada, falsa o erróneamente aplicada; como así también la sintética indicación de cuál es la declaración sobre el o los puntos debatidos que el recurrente procura obtener del Tribunal; no se considerará ninguna cuestión que no haya sido incluida aquí».*

Por el contrario, insiste con las cuestiones de fondo que fueron materia de pronunciamiento en la

sentencia definitiva que pretende revertir y acusa a la denegatoria de incurrir en excesivo rigor formal, pero sin hacerse cargo de los déficits que le fueron expresamente detallados.

II.3. Sumado a ello, refiere haber recurrido en casación con fundamento en la causal prevista por el art. 290 del CPCC, mas no identifica en qué porción de su escrito recursivo introdujo o desarrolló esa causal (ver ap. III). Luego, al criticar la decisión que impugna (ap. IV), no plantea que la Cámara haya omitido su tratamiento, ni argumenta sobre la base de qué razones debería hacerlo este STJ.

Por otro lado, en el petitorio (ap. V), requiere que se conceda la casación y se revierta la condena impuesta en tanto se falló en contra de la jurisprudencia emanada por la CSJN al aplicar de forma analógica una ley no vigente. Ese planteo, así expuesto, resulta incomprensible.

En definitiva, la queja no logra demostrar el error en la denegación de la casación ni el excesivo rigor acusado, en tanto no acredita el cumplimiento de aquellos recaudos legales que le fueron identificados como inobservados.

III. Pero, además, si este Superior Tribunal, como juez del recurso, acude a la lectura de la sentencia definitiva objetada y la contrasta con la casación, se advierten déficits vinculados con la crítica allí desplegada por la recurrente que igualmente sellan la suerte adversa de la vía intentada.

En primer lugar, se observa que los cuestionamientos expuestos al recurrir ante esta sede no logran demostrar la arbitrariedad que

denuncia, al no enfocarse en las razones que le dio la Cámara para rechazar los agravios vertidos en su apelación ordinaria.

Más aún, ni siquiera las identifica. Nótese que al acudir a la lectura del recurso de casación (ID 1741849, agregado a la queja) se advierte que la impugnante hace caso omiso a que sus críticas vinculadas con el IBM, la incorrecta aplicación del art. 12 LRT -texto según decreto 669/19 y normas reglamentarias- y los intereses de condena y su capitalización fueron tratadas y rechazadas por la alzada -con voto de los Dres. Jalil y Fiordelisi-.

Al respecto, la SDL N° 140/24, en punto al IBM rechazó el agravio en tanto la quejosa no logró poner en crisis la estructura de la sentencia, pues la fundamentación recursiva fue insuficiente para demostrar el error de cálculo, ni acreditó cuál es el importe correcto según la postura esgrimida. Descartó la violación al principio de congruencia efectuada, afirmó que no existió enriquecimiento sin causa y concluyó que no se acreditó la arbitrariedad denunciada. Además, desde otro aspecto, afirmó que sus manifestaciones se sustentaron en una norma no vigente.

En cuanto a la aplicación al caso del art. 12 LRT -DNU 669/19- advirtió, con cita de <PER> de este STJ, que la sentencia de grado dio expresa respuesta a ese punto, sin que el agravio logre rebatirla. Agregó que no se demostró el perjuicio alegado en tanto la afirmación de la existencia de una supuesta diferencia que podría arrojar una eventual liquidación de dos, tres o cinco veces mayor, resultó genérica. Declaró desierto el agravio y carente de contenido.

Sobre los intereses moratorios concluyó que se deben desde el momento en el que se produjo el hecho dañoso hasta su efectivo pago (art. 2 de la ley 26.773) y respecto de la aplicación en autos de las Resoluciones 1039/19 y 332/23 de la SSN advirtió que tales cuestiones no fueron esgrimidas en la etapa procesal oportuna por lo que se trató de un capítulo no propuesto que no puede ser materia de abordaje en la instancia -art. 280 CPCC-.

Finalmente, ratificó la capitalización de intereses a la fecha de la notificación de la demanda, con cita de jurisprudencia de este Cuerpo.

La casacionista, en lo que hace al primer agravio -IBM incorrecto- no se ocupa de demostrar que su crítica fue eficaz para acreditar la arbitrariedad acusada al no hacerse cargo de que la alzada le remarcó que no probó de forma clara y sólida cual era el monto correcto que debió ser fijado como IBM. Tampoco esboza crítica alguna en relación con la afirmación de que su agravio se fundó en una norma no vigente. Más allá de eso, su argumentación resulta confusa ya que en varios pasajes de su presentación no sólo hace referencia a una norma no aplicada en autos -art. 12 LRT según texto ley 27.348- sino que incluso describe la decisión alcanzada en forma errónea.

En cuanto a la aplicación al caso del art. 12 LRT -DNU 669/19- nada dice sobre la conclusión de la alzada de que su agravio de apelación no logró rebatir este aspecto de la sentencia -en el que expresamente se hizo referencia al fallo Naufal de este STJ-. Tampoco se hace cargo de lo resuelto en torno a la aplicación de las Resoluciones 1039/19 y 332/23 de la SSN ni de las razones de la alzada

para rechazar el planteo relacionado al inicio del cómputo de los intereses. Respecto de este último aspecto, la sentencia atacada citó las normas aplicables y jurisprudencia de este Superior Tribunal en apoyo a sus argumentos; sin embargo, de modo alguno la recurrente se ocupa de rebatirlas ni de probar la suficiencia de su agravio de casación en este punto.

Al respecto, debemos consignar que dicho cuestionamiento fue tratado por este STJCh en el fallo « *<PER>*» (SD N° 14/19) en el que se resolvió que los intereses corren desde que acaeció el evento dañoso (art. 2 de la ley 26.773 y art. 1748 del CCyCN) tal como lo dispuso la sentencia en crisis. Criterio que fue luego mantenido en las SD N° 29 y 30/23, 24, 25, 32, 37, 43 y 45/24, entre otras.

En lo que hace específicamente a la capitalización de intereses -más allá de la reedición de argumentos- incurre en un profundo desenfoque. Así, en primer lugar -pto. II, último párrafo- hace alusión a que solicita la revisión del pronunciamiento impugnado y se computen los intereses sin capitalización semestral, periodicidad no dispuesta en la causa, sino ante la eventualidad de que se incumpla con el pago de la liquidación correspondiente. Sumado a ello, acusa el apartamiento a lo dispuesto en el art. 903 del CCyCN, circunstancia que no fue materia de debate en el curso del trámite. En definitiva, nada dice sobre la fundamentación de la Cámara en el sentido de que este Superior Tribunal viene sosteniendo en los fallos citados la procedencia de la referida capitalización en procesos como el que aquí nos ocupa.

Ello así, la recurrente no logra demostrar la arbitrariedad que dogmáticamente denuncia. Cabe enfatizar que la doctrina de la arbitrariedad se endereza y cobra plena virtualidad en las sentencias fundadas exclusivamente en la voluntad de los jueces y desprovistas de todo apoyo legal y no cuando media, por parte de los litigantes una disconformidad extrema en el modo de resolver de la alzada (STJCh, SI N°72/89, 223/92, 45/SRE/06, 80/SRE/08, 49/SRE/16 y 48/SRE/17, entre otras).

IV. Finalmente, y en este punto del análisis, se advierte que la demandada refiere en la queja que sus agravios se centraron -entre otras cuestiones- en la incorrecta determinación del IBM respecto de un trabajador eventual y que se dispone que el capital devengará intereses desde los 30 días corridos de la primera manifestación invalidante hasta la cancelación del crédito, aspectos que no se condicen con las constancias de la causa, por lo que tales desenfoques se suman a los déficits ya expuestos previamente que conducen al fracaso irremediable del recurso de hecho intentado.

V. Por todo lo dicho, corresponde declarar inadmisible la queja interpuesta, sin regular honorarios en virtud de lo dispuesto por el art. 3, de la ley XIII-4, y la regla 11, Anexo del Acuerdo 3821/09 STJCh.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut:

R E S U E L V E:

1°) DECLARAR inadmisible el recurso de queja interpuesto por la demandada mediante escrito digital CRU-00721500000095004-1 contra la

sentencia interlocutoria N° 3/25 de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, sin regular honorarios.

2°) REGÍSTRESE, notifíquese, y oportunamente archívese.

La presente resolución es suscripta por los miembros del Tribunal que conforman la mayoría (art. 163 del CPCC y art. 73 de la ley XIV-1).

Fdo. Digitalmente el 31/03/2026 por los Mtros. Javier Gastón Raidan, Camila Lucía Banfi Saavedra, Silvia Alejandra Bustos, Mario Luis Vivas y Andrés Giacomone.